76	CODHEM/NJ/4312/2004-3	Lic. Alfonso Navarrete Prida Procurador General de Justicia del Estado de México 15
----	-----------------------	---

ilegalidad de tales sanciones pues el marco legal que rige la actividad del Colegio de Policía de la entidad, no faculta ni al Comandante ni a sus oficiales auxiliares para tales acciones.

Asimismo, en sus testimonios, las y los cadetes también coincidieron en señalar ser objeto de vejaciones y malos tratos, tales como levantarlos en horas muy tempranas -en la madrugada- y obligarlos a realizar ejercicios extenuantes para después forzarlos a arrastrarse por el piso hasta secarlo; que eran humillados y objeto de mofas y frecuentemente se les sancionaba con arrestos para privarlos de sus días de

descanso o pagar cierta cantidad de dinero para poder salir.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formuló al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomendación, que se anexó, se sirva solicitar al Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario, tendente a investigar,

identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos: César Molina García, Domingo Barra García, Ricardo Loza Díaz, y Juan Carlos Rodríguez Chávez, por los actos precisados en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación, a efecto de que en su caso, imponga las sanciones que con estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva implementar las medidas necesarias tendentes a evitar y prevenir que los cadetes del Colegio de Policía del Estado de México, sean objeto de medidas disciplinarias o sanciones que atenten contra su dignidad.

Recomendación No. 76/2004*

El 21 de julio del año 2004, este Organismo inició el expediente CODHEM/NJ/4312/2004-3, con motivo de la queja presentada por la ciudadana hondureña Karen Ramírez Alvarado, en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, remitida por el Director de la Oficina de la Frontera Sur-Tapachula, Chiapas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La quejosa refirió que el 29 de junio del año 2004, mientras viajaba a bordo de un tren, cuatro elementos de la Policía Ministerial de la entidad le arrojaron piedras y la bajaron del mismo, que uno de los agentes la jaló del pantalón y le pidieron dinero para dejarla ir; además de que los cuatro servidores públicos se encontraban en estado de ebriedad.

Al responder a los informes requeridos, la Procuraduría

General de Justicia de la entidad negó contar con información sobre el aseguramiento de la quejosa e incluso negó que sus elementos policiales realizaran detenciones de indocumentados. Sin embargo, con documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Migración, este Organismo demostró que el 29 de junio del año 2004, dos agentes ministeriales del primer grupo de investigaciones de la Subprocuraduría General de Justicia de Tlalnepantla detuvieron a la ciudadana hondureña Karen Ramírez Alvarado y a otro extranjero indocumentado, en la colonia Lechería de la carretera vieja a Tlalnepantla-Cuautitlán. La detención se debió, según la versión de los propios elementos policiales, a que la agraviada y otro indocumentado, ante su presencia se *echaron* a correr y al alcanzarlos “confesaron” su ilegal estancia en nuestro país.

Realizada la detención, los elementos de la Policía Ministerial

omitieron poner a disposición del Ministerio Público a los indocumentados asegurados; en vez de ello, *motu proprio*, los llevaron a la Cruz Roja para que los revisaran físicamente y vía fax, informaron a las autoridades migratorias nacionales del aseguramiento. Así, retuvieron a los indocumentados, teniéndolos a su disposición, sin registro alguno y en un lugar no identificado, hasta el día siguiente, 30 de junio del año 2004, que fueron entregados al personal del Instituto Nacional de Migración.

Las evidencias obtenidas por esta Comisión demostraron que la privación de la libertad de la quejosa fue indebida e ilegal, al realizarse en franca contravención de los derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política Federal.

La investigación realizada por esta Defensoría de Habitantes mostró que elementos de la Policía Ministerial, con la aquiescencia de

* La Recomendación 76/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 22 de noviembre del año 2004 por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.

su jefe de grupo, pero sin el conocimiento de sus autoridades y mandos superiores, realizaban detenciones de extranjeros, por el sólo hecho de encontrarse en nuestro país de manera irregular. También reveló que estas detenciones eran práctica común, pues además del caso de la quejosa, quedaron debidamente demostrados 12 aseguramientos más, en las mismas condiciones y se encontraron elementos de convicción sobre 40 casos similares en el mismo mes.

Es conveniente puntualizar que las normas jurídicas de la materia no facultan a la Policía Ministerial local para vigilar la legal estancia de extranjeros en nuestro país - facultad exclusiva de autoridades federales- y que, como quedó demostrado documentalmente, las detenciones no se realizaron en el supuesto de flagrante delito.

Recomendación No. 77/2004*

El cinco de agosto de 2004, este Organismo hizo constar en acta circunstanciada la llamada telefónica de la señora Norma González Vera, quien refirió hechos presuntamente constitutivos de violación a derechos humanos cometidos en agravio de la menor Lucero Lucía Reyes Zetina, atribuidos a servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle, México.

En dicha comunicación, la señora Norma González Vera manifestó: *"...mi llamada telefónica es para presentar queja en contra de policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tenango del Valle, México, quienes el día de hoy, aproximadamente a las diecisiete*

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló al Procurador General de Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a su digno cargo, a fin de que se inicie, integre y resuelva con estricto apego a Derecho, el correspondiente procedimiento administrativo, tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Policía Ministerial: Arturo Matías Murillo, Gerardo Sánchez Bonilla, Juan Jesús González Martínez, Ricardo Soriano Segundo, Víctor Manuel Reyes García, Mauro Bahena Vite, Marco A. Carmona Verona, Alberto Vargas Hernández, Leonel

horas, de manera arbitraria detuvieron a Lucero Lucía Reyes Zetina, de dieciséis años de edad... el Oficial de nombre Camerino Hernández me dijo que la menor fue presentada a la Comisaría Municipal a petición de sus padres Erasto Reyes Juárez y María Cristina Zetina López, la cual todavía se encuentra en esa comisaría... privada de su libertad...".

En la referida fecha, personal de actuaciones de esta Comisión realizó una visita de inspección en las instalaciones de la comandancia municipal de Tenango del Valle, México, lugar donde se entrevistó al jefe de turno, quien entre otras cosas indicó que la infante fue asegurada desde la cinco de la tarde de ese mismo día a petición de sus padres y admitió

Hurtado Salgado, Alejandro González Mújica, Gabriel García Montiel, Rafael Alejandro Sánchez, Rodolfo Javier Ruiz de Chávez, Juan Rodrigo Castelán Juárez, Alejandro Castillo Martínez y Alejandro Ávalos Báez, así como a los jefes de grupo, comandantes: Juan Carlos Campos Zaragoza, Jesús Puebla Granados, Miguel Méndez Claudio, Juan Ramírez López y Salatiel Gelover Valdez, por las acciones que han quedado descritas en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores públicos referidos, se sirva ordenar a quien corresponda, se inicie la correspondiente averiguación previa, se integre y determine con estricto apego a Derecho.

que no cometió ninguna falta administrativa; asimismo, se constató la presencia de la menor Lucero Lucía Reyes Zetina en el área de vestidores de los elementos policiales, quien manifestó que fueron por ella policías municipales y que estuvo dentro de las galeras.

Asimismo, tomando en consideración que llegaron a la citada comandancia los padres de la infante, personal de este Organismo conversó con ellos sobre la situación, argumentando el señor Reyes Juárez que solicitó la intervención de la policía toda vez que su hija lo había golpeado, además de que presentaba problemas conductuales. Momentos después el mencionado jefe de turno, permitió que la menor se retirara en compañía de sus padres.

* La Recomendación 77/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Valle, México, por detención arbitraria el uno de diciembre del año 2004. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 25 fojas.